

T DEMOCRACIAS EN,
RANS **FORMACIÓN**
¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?

Anja Dargatz y Moira Zuazo
Editoras

Democracias en trans-formación **¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?**

Primera edición: marzo de 2012

© Friedrich Ebert Stiftung

Friedrich Ebert Stiftung-Bolivia (FES)
Av. Hernando Siles 5998
Tel. 591-2- 2750005
www.fes-bolivia.org
info@fes-bol.org
La Paz, Bolivia

Fundación Friedrich Ebert (FES-ILDIS), Ecuador
Av. República 500 y Diego Almagro
Edif. Pucará, 4º piso, of. 404
Tel. 593-2- 2562103
info@fes.ec
www.fes-ecuador.org
Quito, Ecuador

ILDIS-Venezuela
Av. San Juan Bosco con 2º
Transversal de Altamira
Edificio San Juan, piso 4
ildis@fes.internet.ve
www.ildis.org.ve
Caracas, Venezuela

Elaboración de la memoria: Fabiola Aparicio y Rocio Farfán
Cuidado de edición y diseño de interior: Patricia Montes
Diseño de tapa: Alejandro Salazar
D.L.: 4-1-1301-12
ISBN: 978-99954-2-325-4

Impreso en Creativa
Tel 2 488 588
La Paz, Bolivia

Contenido

Presentación	7
Introducción	9
<i>Moira Zuazo</i>	
La democracia boliviana: avances y desafíos	23
<i>Fernando Mayorga</i>	
Estado actual y futuro de la democracia en Ecuador	81
<i>Simón Pachano</i>	
Perspectivas del proceso de democratización en Ecuador.	
Cambio político e inclusión social (2005-2010)	103
<i>Franklin Ramírez Gallegos</i>	
El futuro de la democracia en Venezuela	155
<i>Vanessa Cartaya y Nino Gianforchetta</i>	
Comparación del futuro de la democracia entre Venezuela, Bolivia y Ecuador	205
<i>Pablo Stefanoni</i>	
Memoria del taller Futuro de la Democracia	251
Autores	327

Comparación del futuro de la democracia entre Venezuela, Bolivia y Ecuador

Pablo Stefanoni*

Contenido

Trayectorias institucionales, crisis políticas y emergencias plebeyas.....	211
Venezuela: el fin de la “armonía de las desigualdades”	213
Ecuador: Que se vayan todos.....	214
Bolivia: de la protesta a la propuesta.....	217
Tipos de liderazgo y menos partidos.....	219
Innovaciones en la participación democrática:	
¿una redistribución del poder?	224
La planificación participativa se eleva a principio constitucional a nivel local y nacional	233
Asistencialismo o igualdad: ¿Qué inclusión social?.....	236
Bibliografía	248

Este artículo tiene por objetivo analizar comparativamente los escenarios de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, para lo cual se ha utilizado como insumos los informes por país¹⁰², así como una bibliografía complementaria. Para facilitar la comparación nos enfocaremos en dos ejes de análisis: las tensiones en relación con la democracia de la matriz nacional popular hegemónica —con diferentes matices y grados— en los tres procesos en cuestión y el problema del rentismo y sus consecuencias en términos de condicionamientos institucionales y sus consecuencias sobre la inclusión social. Pensamos que este abordaje nos permitirá indagar la actual coyuntura política trinacional a partir de una mirada capaz de echar luz tanto sobre la calidad de la democracia en términos institucionales, como en relación con la democracia como canal para la generación de igualdad ciudadana en países que arrastran exclusiones añejas derivadas del colonialismo interno.

No es casual que los nuevos Gobiernos progresistas suelen enarbolar variantes de la consigna “ahora hay Patria para todos”, lo que presupone que antes no la había, y sin una parte de la sociedad que se sienta excluida de la representación no suele haber fenómenos populistas¹⁰³. Es por ello que los discursos “populistas” enfatizan la existencia de dos países: uno visible e integrado pero formal, y otro invisible, sumergido y al mismo tiempo muy real, el “país verdadero” (un elemento político-analítico que suele dejarse de lado por cierto análisis “antipopulista”). Todos estos procesos constituyeron su identidad a partir de la denuncia de la “democracia corrupta y excluyente”.

Y como puede observarse en los procesos venezolano, boliviano y ecuatoriano, ambas visiones de la democracia no siempre van de la mano. La matriz nacional-popular, de la que los Gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa son tributarios —y que lleva consigo un recambio de las élites en el poder— implicó históricamente una tensión entre democracia institucional y democracia plebiscitaria de masas; dicho en otras palabras, una ambivalencia “entre un proyecto nacionalista revolucionario conducido por el pueblo junto a su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal” (Svampa 2009).

La matriz nacional-popular de los Gobiernos de Chávez, Morales y Correa implicó históricamente una tensión entre democracia institucional y democracia plebiscitaria de masas.

102 Son los informes sobre Bolivia, Ecuador y Venezuela, que constituyen la parte central de esta publicación.

103 Véase Laclau 2005.

Es posible observar un proceso de democratización en su sentido amplio: siguiendo a Tilly, se da el desarrollo de la confianza política, la disminución de la autonomía de los centros de poder independiente (los poderes fácticos) en relación con la producción de las políticas públicas y el aumento de la igualdad política (Tilly 2010). Pero ello no debe opacar los déficit democrático-institucionales que acompañan a estos procesos y que por momentos permiten hablar de democratización paradójica (Do Alto y Stefanoni 2010). Son esas tensiones las que, bajo la forma de incremento de la participación “desde abajo”, a menudo con un fuerte dinamismo emocional y una pluralidad de figuras de la democracia participativa y directa en las nuevas Constituciones, se van a expresar en los tres procesos de cambio, acompañados, al menos en algunas de sus etapas, de fuertes polarizaciones sociales, amplio decisionismo presidencial y visiones binarias de la política (pueblo-oligarquía, patria-anti-patria). No es casual que en las nuevas constituciones refundacionales persista la tradición presidencialista latinoamericana.

Por otro lado el hecho de que, como señala Franklin Ramírez Gallegos para Ecuador —pero el análisis vale también para Bolivia y Venezuela—, los proyectos de democracias participativas se articulen con una fuerte desconfianza hacia la política, los partidos y las instituciones, dibujará asimismo ciertas características (y ambivalencias) de los procesos de redefinición de las comunidades políticas (Ramírez Gallegos 2009).

En segundo lugar, un elemento común a la *Revolución Bolivariana*, la *Revolución Democrática y Cultural* y la *Revolución Ciudadana* —nótese que todos estos procesos de cambio se autodefinen como revoluciones— es el carácter extractivista de sus economías, las dinámicas rentistas que genera y la

Un elemento común a los tres es el carácter extractivista de sus economías, las dinámicas rentistas que genera y la dificultad para comenzar a pensar transiciones posextractivistas de mediano o largo plazo.

dificultad para comenzar a pensar transiciones posextractivistas de mediano o largo plazo. Como ya se ha demostrado, estas “paradojas de la abundancia” suelen ir acompañadas de débiles niveles de institucionalidad, distorsiones en la asignación de recursos —conocidos como enfermedad holandesa, o “enfermedad neocolonial” en términos de Fernando Coronil (2009)— y una visión simplista del desarrollo (Estado mágico o cultura del milagro: una idea de que todo se puede “porque somos ricos”) y, finalmente, alto nivel de estatismo, centralización y verticalismo que frena los procesos de construcción de ciudadanía y alientan las democracia plebiscitarias (Acosta 2010).

Una de las derivaciones ideológicas es lo que Fernando Molina ha llamado “nacionalismo geológico” (Molina 2009), que al tiempo que se propone un “Estado fuerte”, como el vicepresidente Álvaro García Linera ha definido el proyecto vigente en Bolivia, choca con una serie de consecuencias de las lógicas extractivistas que minan sus objetivos y que, siguiendo a Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana), podemos sintetizar en:

- Instituciones del Estado demasiado débiles para hacer respetar las normas y ser capaces de fiscalizar las acciones gubernamentales;
- Ausencia de reglas y de transparencia, que alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y los bienes comunes;
- Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los Gobiernos;
- Ilusión de riqueza fácil derivada de la explotación y exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la sociedad y los Gobiernos.

En efecto, el análisis de los escenarios y desafíos de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador no puede prescindir de su contexto, que, como veremos, comparte una serie de características comunes pero también diferencias que ameritan una comparación saliendo de los clichés de las “dos izquierdas” (Saint-Upéry 2008a) y otras esquematizaciones que, a menudo, ocultan más de lo que dejan ver sobre procesos fuertemente teñidos por senderos institucionales y culturas políticas arraigadas en cada uno de los países considerados.

Trayectorias institucionales, crisis políticas y emergencias plebeyas

Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido los países del “giro a la izquierda” donde más fuertemente ha impactado la crisis del sistema de partidos y donde la dinámica de la movilización social ha generado procesos de renovación política y cambio de élites que ha llevado a analistas políticos, activistas y dirigentes de movimientos sociales de la región y del exterior a considerar que estos tres procesos constituyen el ala radical de los procesos de cambio sudamericanos. Aunque ello puede ser discutible, especialmente a partir del análisis de las políticas públicas efectivamente aplicadas y la amplitud de las utopías en juego, no es menos cierto que fue en este bloque donde los discursos de refundación tuvieron mayor calado. De estas demandas emergió la convocatoria de Asambleas Constituyentes que se propusieron no solamente reformar las cartas magnas vigentes, sino rediseñar el esqueleto institucional a partir de una

serie de propuestas concebidas como la superación del viejo “Estado liberal” junto a la democracia formal, por un nuevo Estado posneoliberal junto con una democracia —de la mano de un “nuevo constitucionalismo”— que ya no sería simplemente instrumental sino sustantiva.

Todo ello ha dado lugar a polémicas teórico-políticas relacionadas con la redefinición del vínculo sociedad civil-Estado que discutiremos más adelante. Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales son el resultado de esta combinación de implosión del viejo sistema político y de la emergencia de alternativas electorales sui géneris. No obstante, estas crisis —vinculadas a un creciente cuestionamiento al Consenso de Washington— se procesaron de diferente manera en cada uno de los países, por lo cual vale la pena detenerse en cada uno de los procesos concretos de crisis y renovación de la política.

En el caso venezolano, el Caracazo constituirá un baño de realidad sobre la inestabilidad —y estrechez— del consenso democrático instaurado a partir del Pacto del Punto Fijo de 1958, en tanto que en Bolivia y Ecuador se producirán una serie de derrocamientos presidenciales que marcarán el agotamiento de un tipo de “gramática política” que marcó los ciclos democráticos iniciados

**Son los países del “giro a la izquierda”
donde más fuertemente ha impactado
la crisis del sistema de partidos y
donde la dinámica de la movilización
social ha generado procesos de
renovación política y cambio de élites.**

en 1982 y 1979, respectivamente, pero en ambos casos se observa un elemento en común: van a ser exitosos los discursos que interpelan a una parte de la sociedad que por motivos étnicos y socioeconómicos se siente excluida del sistema político. Ello se traducirá luego en consignas que enfatizarán en que —procesos de cambio mediante— la

Patria (y los recursos naturales estratégicos) serán al fin, como ya mencionamos, de todos. En otras palabras, transformar al Estado en garante de un “acceso efectivo de los menos privilegiados a los derechos y a los beneficios materiales y espirituales (en término de estatus y de poder simbólico, por ejemplo) de la pertenencia a la colectividad nacional” (Saint-Upéry 2008b).

En gran medida, hoy se vuelve a la idea de la existencia de un “partido de la nación” frente a la antinación, lo que conlleva una “politización” de los conflictos de intereses (es común que se acuse a tal o cual lucha reivindicativa económica, incluso llevada adelante por aliados, de hacer el juego al imperio o directamente de recibir financiamiento de Usaid), y conlleva también una idea sui géneris del pluralismo. Como señala Fernando Mayorga en su informe para Bolivia:

el MAS considera que el pluralismo se manifiesta de una manera poco convencional, esto es, se manifiesta en el seno del partido de gobierno como debate interno entre las posiciones del Gobierno y de las diversas organizaciones sociales que forman parte del oficialismo pero no están cooptadas por el MAS debido a las peculiaridades que presenta esta organización política¹⁰⁴.

Adicionalmente, la idea de “Estado integral” del vicepresidente Álvaro García Linera borraba en gran medida la distinción Estado-sociedad civil, como pudo verse en sus polémicas declaraciones en sentido de que, en ciertos contextos, el Defensor del Pueblo también debería defender al Estado cuando éste se ve amenazado por intentos de desestabilización¹⁰⁵.

Venezuela: el fin de la “armonía de las desigualdades”

En 1989, el Caracazo representó un duro golpe a un sistema político bipartidista que había sobrevivido desde el pacto del Punto Fijo de 1958, logrando neutralizar a potenciales terceras fuerzas y garantizando la continuidad de la democracia mientras la mayoría del continente se encontraba inmersa en cruentas dictaduras militares. Los disturbios callejeros contra las políticas de ajuste de Carlos Andrés Pérez —quien en su primer mandato, en los años setenta, implementó varias medias de bienestar— acabaron con un saldo de entre 400 y miles de muertos, según las fuentes, aún controversiales respecto a la cifra final.

La “armonía” venezolana —sustentada una suerte de cooptación sobornada de los pobres— mostraba su cara oscura¹⁰⁶. El modelo atípico para la región de una estable “democracia de partidos” con una “oposición leal” y “realineamientos electorales fuertemente desideologizantes en los dos principales partidos (abandono creciente de ideologías, programas y principios)” estalló por los aires (Ramos Jiménez 1999). Es en el marco de un creciente antipartidismo que se produce la asonada militar de 1992, que pese a su fracaso lanzará a Hugo Chávez a la política nacional, y el “por ahora” (no pudimos) profetizaría la crisis terminal del “duopolio” y la proyección posterior del propio Chávez con las banderas del poder popular, el antipartidismo y la

104 Sobre el MAS, véase Do Alto y Stefanoni 2010

105 Periódico *Los Tiempos*, Cochabamba, 14-5-2010.

106 “Se argumentaba que su sólida democracia, acitada por la renta petrolera del Estado, había permitido establecer y consolidar canales de mediación y representación eficientes que conjuraban el conflicto social pronunciado y/o violento” (López Maya 2005).

refundación nacional. Para ello apeló a una profusión de citas de la Biblia y del ideario bolivariano: jurará en 1999 sobre la “Constitución moribunda”.

Como señala Ramos Jiménez, la contienda de 1998, en la que Chávez —a quien la burguesía venezolana veía como un personaje bastante folclórico— se hará finalmente con el poder, puede analizarse como el clivaje democracia partidista-democracia antipartidista. Este último bloque articulará, además del Movimiento Quinta República (MVR) de Chávez, a partidos minoritarios como el Movimiento al Socialismo, Patria para Todos y el Partido Comunista venezolano, y dará lugar a “un renacimiento no institucional de la política”. La victoria de Chávez con el 56% de los votos fue un triunfo contra la Cuarta República, cuyo rechazo aparecerá, a partir de entonces, como una suerte de “exterior constitutivo” del nuevo proyecto de renovación política.

Comenzará así un largo camino en el que el bolivarianismo se irá redefiniendo (y radicalizando en algunas de sus facetas) en un tránsito que, para la historiadora y ex candidata del PPT Margarita López Maya, tendrá una evolución no virtuosa desde las propuestas de “democracia participativa y protagónica” plasmadas en la Constitución de 1999 hacia una deriva autoritaria de la mano del denominado “socialismo del siglo XXI”, que se intentó plasmar en la derrotada reforma constitucional de fines de 2007 y que finalmente fue impulsado parcialmente a través de decretos y leyes.

Ecuador: Que se vayan todos

El 20 de abril de 2005, después de diez días de movilizaciones, el coronel Lucio Gutiérrez se vio obligado a abandonar anticipadamente el poder, que quedó en manos del vicepresidente Alfredo Palacio. Y este derrocamiento no era un rayo en cielo sereno: en solo ocho años, tres presidentes fueron expulsados del poder¹⁰⁷ por una combinación de movilizaciones callejeras (con una fuerte participación de la organizaciones indígenas articuladas en la CONAIE), maniobras conspirativas del Poder Legislativo, sostenimiento o pérdida de apoyo en las Fuerzas Armadas y posición de la embajada de Estados Unidos, combinación que para Ramírez Gallegos se materializó en una “tecnología del derrocamiento” (Ramírez Gallegos 2005).

Gutiérrez participó él mismo en una conspiración entre militares y dirigentes del partido indígena Pachakutik —brazo político de la CONAIE—

107 Los otros dos fueron Abdalá Bucaram (“el loco”), en 1997, y Jamil Mahuad (quien dolarizó la economía nacional) en 2000.

con un fuerte carácter *putchista*. Y, pese al fracaso parcial de ese golpe (expulsaron a Mahuad pero asumió su vicepresidente Gustavo Noboa), ahí concretó los vínculos que luego contribuirían a poner en pie una alianza política con los indígenas y con los maoístas del Movimiento Popular Democrático, que le permitió ganar las elecciones en 2003 y construir la base política social de la primera y breve etapa “nacional-popular” de su Gobierno (cuando era comparado con Hugo Chávez por su ideología y trayectoria). Luego vendrían la expulsión del Pachakutik¹⁰⁸ y el giro autoritario, proestadounidense y neoliberal¹⁰⁹, que lo conduciría por el despeñadero político poco más de dos años después de asumir. El Gobierno de Gutiérrez estuvo marcado por una combinación de nepotismo y endogamia castrense, con unos dispositivos de inteligencia militar que se desplegaron más como una “segurización” del poder presidencial que como la matriz pensante de un proyecto político expansivo, como lo fue el fujimorato en Perú.

Pero si los derrocamientos anteriores estuvieron marcados por el “factor indígena” como núcleo articulador de una serie de demandas y cuestionamientos al sistema, en 2005 se produjo un *desborde ciudadano* tanto de la tutela partidista como de cualquier estructura organizativa, en medio de un fuerte reclamo de “Que se vayan todos”, al igual que las protestas en Argentina durante la crisis de 2001 (Ramírez Gallegos 2010a). Los indígenas se encontraban debilitados tanto por el desgaste originado en su participación fallida en los primeros meses del gutierrato como por el ciclo descendente en la movilización social organizada. Los “forajidos” fueron una de las expresiones de este movimiento con características espontáneas y fuertemente antipartidistas, lo que explicará, a la postre, la emergencia de Rafael Correa. Como señala Ramírez Gallegos,

No solo estuvieron [en las calles] sectores ligados a una defensa de la institucionalidad liberal democrática, ni tampoco aquellos concernidos por propósitos autogestionarios que claman por una democratización radical del orden político por vía de una intervención directa y asamblearia en la vida pública. También fueron partícipes de la movilización algunos sectores permeados por ideologías convencionales y reaccionarias ancladas en los imaginarios del orden colonial del poder e informadas por un sentido racializado de la jerarquía, así como otras expresiones sociales que serán francamente autoritarias y antidemocráticas (Ramírez Gallegos 2005).

108 Véase AA VV 2004.

109 Véase Stefanoni 2004.

Por eso intervinieron en la indignación moral de la multitud movilizada contra el copamiento de la Justicia, las arbitrariedades recurrentes y el uso instrumental de la ley, tanto la denuncia de la traición del Presidente a su programa de cambio como diatribas contra el “cholo” Gutiérrez. Con todo, no se trataría solo de una reacción episódica ante un mal Gobierno, sino “de una contestación generalizada a la política, tal y como ésta ha operado hasta ahora, que contiene, a su vez, una difusa demanda para su refundación” (Ramírez Gallegos 2005).

Es esta “marca ciudadana”, en el contexto de una regresión de la capacidad de movilización —pero sobre todo de interpelación— del movimiento indígena¹¹⁰ que habilita la posibilidad de emergencia de un liderazgo como el de Rafael Correa, un economista de la costa con un discurso radical contra la partidocracia y una propuesta posneoliberal, de izquierda cristiana, en línea con el nuevo clima ideológico de gran parte de Sudamérica luego del agotamiento de las promesas neoliberales de “derrame” del crecimiento durante los años noventa.

Lejos de propiciar una coalición con los movimientos sociales e indígenas, Correa apostó a construir una fuerza política propia —constituida en gran medida por jóvenes “tecnócratas” progresistas— y a la traducción en votos de su propio carisma. Y, como señala Ramírez Gallegos, el voto a Correa —sin pasado político más allá de una breve gestión como ministro de Economía de Palacio— se debió al rechazo de una parte de la ciudadanía a la candidatura de Álvaro Noboa, empresario bananero y representante de la más rancia oligarquía ecuatoriana, quien obtuvo ventaja sobre Correa en la primera vuelta.

Este clima antipartidos explicará más tarde por qué Correa —quien sorprendentemente no presentó candidatos al Congreso para reforzar su rechazo al “sistema”— logró convocar a referéndum para una Asamblea Constituyente y destituir a los congresistas que intentaron obstaculizar la convocatoria electoral, inaugurando así la Revolución Ciudadana. Un nombre que no será casual: la concepción del cambio del correísmo se basa en una visión anticor-

110 En las elecciones de 2006, el candidato del Pachakutik, Luis Macas, obtuvo solamente poco más del 2% de los votos.

porativa de la política (un espejo de la democracia corporativa boliviana) que buscará una proyección hacia los ciudadanos no organizados y generará una serie de conflictos y tensiones posteriores con la “sociedad organizada”, desde los indígenas hasta la Policía.

Ramírez Gallegos observa, como resultado de estas posiciones “anticorporativas”, la existencia de una “redistribución sin reconocimiento”, que ha ido provocando desde 2009 protestas de sectores sociales que, en teoría, deberían ser parte de la base de la Revolución Ciudadana. Y aunque reconocen los avances posneoliberales, “resienten, sin embargo, un enorme malestar por la falta de espacios de debate político con la fuerza gobernante”. Correa solo parece ver en los actores organizados “una constelación de demandas particularistas poco dispuesta a inmiscuirse en la construcción del bien común” (Ramírez Gallegos 2010b).

Bolivia: de la protesta a la propuesta

Es común colocar la “Guerra del Agua” de 2000 como un momento de inflexión en el que el “consenso neoliberal”, que garantizó quince años de inédita estabilidad política, comenzó a ser erosionado por la acción colectiva callejera y los renovados discursos nacionalistas vinculados a la “recuperación de los hidrocarburos”. Pero será en octubre de 2003 cuando el sistema político recibe un golpe definitivo: la megacoalición construida por Gonzalo Sánchez de Lozada luego del “febrero negro”¹¹¹ provocó que la insurrección urbanarural, conocida como la “Guerra del Gas”, se enfrentara no solo al gubernamental Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), sino al conjunto de los partidos sistémicos, lo que aceleró la implosión del ya fragmentado sistema partidario construido desde la restauración democrática de 1982. La demanda de nacionalizar el gas y convocar a una Asamblea Constituyente fue habilitando un renovado clima ideológico que cuestionaba, al mismo tiempo, al neoliberalismo implementado desde 1985 y al “Estado colonial”, que bajo el nuevo sentido común alentado por el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indígena Pachakuti¹¹², además de una pluralidad de organizaciones sociales,

111 En febrero de 2003, un intento de aprobar un impuesto a los salarios generó un clima de descontento que incluyó un amotinamiento policial que consiguió apoyo de estudiantes del colegio Ayacucho de La Paz. La represión de los policías por parte de las FF AA generó más de diez muertos y decenas de heridos.

112 En los años setenta-ochenta fueron los kataristas quienes interpellaron al Estado con sus denuncias de colonialismo interno, y en los noventa el partido Conciencia de Patria agrupó a los “cholos” y contribuyó a la etnización del discurso nacional-popular.

era percibido como una continuidad del período colonial con escasos o frustrados cambios, como los producidos en los años cincuenta.

En efecto, la característica más novedosa del proceso boliviano fue el correlato entre las protestas callejeras —y las insubordinaciones sociales— y la

En Bolivia la insurrección urbana-rural conocida como la “Guerra del Gas” se enfrenta no solo al gubernamental MNR, sino al conjunto de los partidos sistémicos.

emergencia y crecimiento de alternativas políticas “antisistémicas”, especialmente del MAS. Si en 2000 se produce la Guerra del Agua, Evo Morales se ubicará en un cercano segundo puesto en los comicios presidenciales de 2002. Y si en 2003 la Guerra del Gas reconfigura el campo político boliviano, en 2005 Morales ganará las presidenciales con un inédito 54% de los votos.

Pero los éxitos electorales del MAS-IPSP tuvieron un efecto adicional: alinear al nuevo movimiento en la lucha democrática-electoral, debilitar las opciones por la lucha armada (con alguna influencia en la región cocalera del Chapare) y dejar atrás el discurso anticapitalista de la *vieja izquierda* en favor de un programa básicamente antineoliberal, centrado en el rechazo a los efectos de las políticas de privatización (y/o capitalización) aplicadas desde 1985 y de denuncia del sometimiento nacional a las transnacionales y al “Imperio”. Como ha señalado el periodista y escritor Rafael Archondo, debilitada política —y teóricamente—, la izquierda boliviana tomó (casi acriticamente) el etnonacionalismo como tabla de salvación (Archondo 2001), lo que le permitirá a varios de sus ex dirigentes volver a la palestra, primero en el Parlamento y luego en el Gabinete nacional.

Vale la pena retener aquí que el proceso de renovación de la política operó desde el campo hacia las ciudades, basado en un fuerte proceso de autorrepresentación social por medio del cual las estructuras gremiales, comunales y

El proceso de renovación de la política operó en Bolivia desde el campo hacia las ciudades, basado en un fuerte proceso de autorrepresentación social.

territoriales se desbordan al ámbito político (una particularidad recurrente del campo político boliviano, por lo menos desde los años cuarenta). Y fue el MAS el que llevó más lejos esta lógica de democracia corporativa-plebeya, donde corporaciones empresariales o la Iglesia católica quedaron fuera del poder y, en este último caso, de sus funciones tradicionales de mediación (Do Alto y Stefanoni 2010) Bajo estas lógicas, la voluntad colectiva es generalmente con-

cebada como la construcción de equilibrios corporativos, gremiales y territoriales, lo que, por ejemplo, al momento de elegir candidatos se manifiesta en la expresión de Evo Morales: “cada organización tiene su candidato” frente a los descontentos¹¹³. A diferencia de Hugo Chávez o Rafael Correa, Evo Morales, surgido de las entrañas del movimiento sindical campesino, es percibido como “uno de los nuestros” por los sectores populares, por lo que su liderazgo puede entenderse como un caso de “carisma situacional”¹¹⁴.

Tipos de liderazgo y nuevos partidos

Hugo Chávez es por muchas razones el clásico líder populista en el sentido de Ernesto Laclau (2005): el líder que debe “construir” al pueblo como sujeto político. Evo Morales, en tanto, hizo el recorrido inverso: dirigente sindical, es producto de un proceso de descorporativización de una serie de sindicatos agrarios y organizaciones de vecinos y trabajadores que se desbordaron al ámbito político. De allí que en el caso de Chávez predomine la dimensión carismática/afectiva en su liderazgo, frente a la autorrepresentación en el caso de Evo Morales (“ahora somos presidentes”, “voy a mandar obedeciendo”, etc.), liderazgo acompañado de una fuerte “confianza étnica”. Rafael Correa, por su parte, apareció como un *outsider* de la política en un contexto de crisis del sistema político y decrecientes niveles de movilización social.

En relación con los nuevos partidos, pueden observarse tres situaciones diferentes: en Bolivia llegó al Gobierno un partido (aunque no se defina a sí mismo como tal) creado en 1995 como “instrumento político” de los sindicatos y organizaciones sociales; en Ecuador se construyó algo a las apuradas —Alianza País en torno a Correa y a un grupo de intelectuales progresistas—, mientras que en Venezuela el Partido Socialista Unido (luego del MBR 200 y

En el caso de Chávez predomina la dimensión carismática/afectiva en su liderazgo, frente a la autorrepresentación en el caso de Evo Morales, acompañada de una fuerte “confianza étnica”. Rafael Correa apareció como un outsider de la política en un contexto de crisis del sistema político y decrecientes niveles de movilización social.

113 No hay que olvidar aquí que la propia concepción de ciudadanía en Bolivia tiene una fuerte connotación gremial/corporativa.

114 Mayorga 2009. Hay en el liderazgo de Morales algunos elementos en común con el de Lula Da Silva en Brasil.

del Movimiento Cuarta República [MVR]) fue construido desde el Estado a partir de 2007. Para el sociólogo Edgardo Lander, “el PSUV es un campo de tensión: ni representa el ejercicio pleno de la democracia desde la base, ni es un espacio que pueda controlarse completamente desde arriba”. No obstante, la profundización de la tendencia al liderazgo personal ha ido erosionando el primer término de la ecuación (una de las consignas del PSUV luego de las elecciones de 2010 fue “Somos millones, una sola voz”). Esta tendencia fue expresada por el propio Chávez sin apelar a eufemismos en la concentración realizada el 13 de enero de 2010 con motivo de la celebración de los 53 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Allí enfatizó:

Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo [...] no soy un individuo, soy un pueblo. Estoy obligado a hacer respetar al pueblo. Los que quieran patria, vengan con Chávez [...] Aquí en las filas populares, revolucionarias, exijo máxima lealtad y unidad. Unidad, discusión libre y abierta, pero lealtad [...] cualquier otra cosa es traición.

En este clima ideológico, Lander sostiene que

La confrontación radical con la oposición, la definición de todo opositor como escualido, como agente del imperialismo, como burgués, como enemigo del pueblo, sirvió en los primeros años para constituir una identidad popular chavista y para consolidarla en el tiempo. Sin embargo, esta lógica de permanente confrontación dicotómica de amigo/enemigo con el tiempo ha terminado por ser contraproducente. Al exigir incondicionalidad al líder y calificar como traición a todo desacuerdo, se va produciendo una ‘depuración’ sostenida del proceso que se traduce en una reducción de la base de apoyo. Esta ‘depuración’, por otra parte, no necesariamente garantiza la preservación, al interior del proceso, de los cuadros y militantes más honestos y más comprometidos con las causas populares. Con seguridad, el oportunismo y el usufructo ilegítimo de los bienes públicos para el enriquecimiento privado tienen que auto-protegerse bajo el manto del lenguaje más radical y de la mayor incondicionalidad al liderazgo del presidente Chávez.

De allí que se pregunte sin responderlo: ¿Cómo procesar las tensiones permanentes que existen entre el impulso del tejido social de base que se ha fortalecido en estos años, la organización y participación democrática desde abajo, y un modelo de liderazgo y toma de decisiones jerárquico y vertical? (Lander 2008),

En el caso boliviano, como hemos señalado, la densidad organizativa de los sectores populares pone límites —encuadra— al liderazgo carismático de Evo

Morales. Pero ello hasta cierto punto. Moira Zuazo se pregunta en un artículo publicado en *Nueva Sociedad*, parafraseando al vicepresidente García Linera (Zuazo 2010): ¿qué pasa cuando los soviets se repliegan? Claramente, hoy el MAS es incapaz de construir espacios de debate interno y de posicionar temas en la agenda pública. A menudo, debe “competir” con otras instancias, como la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) o el Pacto de Unidad, que agrupa a varias organizaciones adherentes y no adherentes al MAS, pero con una lógica de articulación corporativa similar. Y, adicionalmente, se observa una cierta “estatización” del partido, por ejemplo a través del rol de los ministros como responsables de campaña electoral en diferentes regiones del país.

Como señala Zuazo, lo que nos muestra el proceso de los últimos cinco años es que el líder y un pequeño entorno han optado por la centralización del poder para el logro de la cohesión y el partido está debilitado y jugando un rol poco significativo (la dependencia del MAS respecto del líder y de las organizaciones sociales deja poco espacio para la construcción de un aparato partidario más orgánico). En efecto, la figura del “Gobierno de los movimientos sociales” o el “mandar obedeciendo” a las organizaciones no es sencillo en la práctica cuando los repliegues corporativos debilitan las miradas más universalistas. Allí el Estado aparece como el portador de lo universal frente a los movimientos como agentes de intereses particularistas. ¿Qué pasaría si “las organizaciones” se distancian del Gobierno? Por ejemplo, cuando la federación campesina Túpac Katari de La Paz pidió cambios de ministros, Evo Morales se molestó y señaló: “yo no nombro dirigentes sindicales, ustedes no van a nombrar a los ministros”. O cuando el Vicepresidente acusó a las organizaciones indígenas que se oponen a la exploración petrolera en la Amazonía de hacer valer sus intereses particulares por encima de los del país.

El Vicepresidente, al ser consultado sobre la forma de compatibilizar democracia presidencialista y democracia participativa y directa, decía:

Un gobierno de movimientos sociales como es éste, va a vivir una tensión entre concentración y socialización de decisiones. ¿Cómo se valida lo de gobierno de movimientos sociales? Primero, por el tipo de decisiones estratégicas tomadas. Segundo, por la forma de selección de los funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Tercero, por la presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparato estatal, que responden a estos movimientos (Stefanoni, Ramírez Gallegos y Svampa).

Asistimos, así, a una compleja combinación entre liderazgo carismático y autorrepresentación social, que en el caso boliviano aparece como comple-

mentaria más que contradictoria, como a priori podría esperarse. El punto débil de estas lógicas organizativas es la formación de cuadros e inestables procesos de aprendizaje, y pese a esfuerzos por armar una escuela de cuadros, estos no han logrado revertir los déficit de formación política y técnica de los militantes masistas.

En el caso ecuatoriano, Rafael Correa —quien, como mencionamos, pasó fugazmente por el Ministerio de Economía durante el Gobierno de Alfredo Palacio— se presentó exitosamente “por fuera” de la política, con una

El punto débil de las lógicas organizativas en Bolivia es la formación de cuadros e inestables procesos de aprendizaje

fuerte dosis de extroversión (es originario de Guayaquil). Una mezcla de carisma juvenil, de aura de competencia tecnocrática y de cierta prepotencia mesiánica. En cierto sentido, su forma de “autoritarismo” es muy “ejecutivo”, mezclado con una especie de narcisismo característico de los intelectuales públicos. Así, en los debates se caracterizó por su gran eficacia para desarmar los argumentos de sus adversarios. Y luego desarrollaría aún más estos rasgos desde su programa de radio y televisión de los sábados, donde suele jugar el papel de “gran profesor de la nación”¹¹⁵. Como señala Ramírez Gallegos,

La candidatura de Correa fue, en efecto, más lejos que ninguna otra, nunca antes, en su intento de sacar provecho del arraigado antipartidismo ciudadano. Por un lado, y a contracorriente de los *outsiders* del pasado, Correa desconectó su candidatura de todo anclaje partidista y fundó un *movimiento ciudadano* —Alianza País— coordinado desde una estructura colegiada y compuesto por viejas y nuevas formaciones políticas y organizaciones sociales con un claro matiz izquierdista y otras de escasa raigambre ideológica. Con la figura de “movimiento ciudadano” se buscaba remarcar el origen societal de la nueva formación electoral. A la vez, AP tomó la riesgosa e inédita decisión de no acompañar la postulación presidencial con la presentación de candidaturas parlamentarias. Ello delineó la identidad originaria del movimiento (antipartidista), le otorgó un carácter antisistémico, y prefiguró la estrategia del cambio político radical que Correa conduciría desde entonces¹¹⁶.

115 Algo similar puede atribuirse a García Linera en sus más esporádicas apariciones en el canal estatal, donde da literalmente clases al país sobre el proyecto de gobierno. Aunque Chávez hace pedagogía en el Aló Presidente, a menudo lápiz y mapas en mano, está lejos de la clase magistral y apuesta a un vínculo pedagógico/afectivo y de movilización de emociones con las bases, mezclando temas de gobierno con un show mucho más multifacético y argumentalmente bastante caótico.

116 Ramírez Gallegos 2009. En 14 de las 22 provincias, los parlamentarios electos fueron derrotados por el voto nulo.

De esta forma el candidato progresista logró colocar “el antagonismo entre partidos y ciudadanos por delante de toda otra contradicción política”. El virtuoso universo ciudadano (“ciudadanos de manos limpias”) contra la vieja política, la partidocracia corrupta y mafiosa. Una frontera política del proceso que se construiría, además, en contra de los gremios empresariales, los bancos y los grandes medios de comunicación.

Anuncios como armar “comités de defensa de la revolución” estilo cubano generaron, como era dable esperar, más revuelo entre los opositores que concreción efectiva, aunque sí se organizaron algunos “comités familiares”, especialmente en Guayaquil y mayormente con fines de movilización electoral. En noviembre de 2010, Correa llamó a “organizar a las bases de AP”: “Es un error de AP no tener aun esa cultura política organizada, estructurada, movilizadora para defender esta Revolución Ciudadana” pese a haber alcanzado el Poder Ejecutivo hace cuatro años, y ese “es el gran desafío”, afirmó el Presidente ecuatoriano.

“Debe ser una organización que ayude y sirva para construir alternativas para la sociedad, que transforme, que incida en la cultura, un movimiento político que ayude al desarrollo espiritual, una ciudadanía participativa y responsable”. La ministra de Política, Doris Soliz, a cargo de la organización de la convención, definió a Alianza País como “un sólido movimiento de izquierda moderna, reflexiva, libre de dogmatismos, que dé soporte al Gobierno y pueda retroalimentar desde la ciudadanía al poder político”¹¹⁷. Y una propuesta de convertirse en “partido” en lugar de “movimiento” no tuvo el respaldo de los convencionales, que consideraron una contradicción convertir a la agrupación oficialista en partido político, cuando uno de sus postulados ha sido cuestionar permanentemente a las agrupaciones proselitistas de tradición “partidocrática”.

Para Ramírez Gallegos, hay un exceso de mercadotencia en la construcción política correísta:

el implacable realismo de poder del gobierno se complementa así con un sutil realismo sociológico: no tiene sentido procurar la movilización de una sociedad harta y distante de la política. Se trata, más bien, de interpellarla como opinión pública y de hacerle ver —televisión mediante— los logros del gobierno. Nada más efectivo para llegar a una masa de ciudadanos aletargados y desorganizados que el despliegue mediático [...] La suplantación de la construcción organizativa y

117 Notimex, 13-11-2010, en línea: <http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/11/13/4/1158101>

la deliberación democrática por el marketing y la procura de amplias audiencias no bastan, sin embargo, para generar vínculos políticos ni espacios reales de participación e interlocución con actores realmente existentes (Ramírez Gallegos 2010b).

Innovaciones en la participación democrática: ¿una redistribución del poder?

En los tres países analizados, los nuevos Gobiernos hicieron suyo el discurso de la democracia participativa y protagónica, frente a la democracia formal liberal, al tiempo que se rechazaba la institucionalidad heredada como una suerte de “democracia de vitrina”. Los nuevos textos constitucionales recogen varias fórmulas “participativas” como el referéndum revocatorio de presidente y otras autoridades, o la posibilidad de proponer leyes por iniciativa ciudadana. Adicionalmente, las disputas con la oposición y las fuertes polarizaciones, e incluso intentos de golpe (Venezuela) o proyectos desestabilizadores (Bolivia), así como la consolidación de los nuevos Gobiernos se procesó por una larga sucesión de convocatorias a elecciones y de referendos (constitucionales y revocatorios) que fueron sedimentando una correlación de fuerzas favorables a los llamados bloques o tendencias del cambio y debilitaron a los sectores conservadores.

¿Paradójicamente? No es difícil observar un debilitamiento de los parlamentos como instancias de deliberación y articulación de intereses, en un marco de fuerte decisionismo presidencial en los tres casos analizados (incluyendo reelecciones indefinidas o potencialmente indefinidas)¹¹⁸. En Venezuela contribuyó a ello el retiro de la oposición en las elecciones de 2005, a partir de una errada estrategia que buscaba propiciar el colapso del Gobierno pero provocó un efecto contrario: la consolidación del chavismo y un Parlamento que fue una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, al que incluso delegó poderes extraordinarios por un lapso de 18 meses. En el caso boliviano, como veremos más adelante, pese a que la nueva Constitución le da más facultades al Poder Legislativo, la mayoría de dos tercios en manos del MAS facilitó que el Ejecutivo —junto con la llegada de diputados con escasa experiencia— terminara reduciendo en la práctica las capacidades deliberativas de este órgano de poder. Finalmente, es posible observar la misma tendencia en Ecuador. En 2010, el veto presidencial a modificaciones de los propios congresistas de

118 Hay que mencionar que esta situación preexiste a los nuevos Gobiernos progresistas; las reformas neoliberales fueron impuestas a menudo a fuerza de decretazos presidenciales.

Alianza País a la nueva ley de la función pública contribuyó al desencadenamiento del motín policial que puso en vilo la vida del presidente Correa y que el Gobierno consideró un golpe de Estado (Long 2010 y Ramírez Gallegos 2010c). Poco antes del alzamiento, Correa amenazó con la muerte cruzada: la posibilidad constitucional de cerrar el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, lo cual no contribuiría, precisamente, al fortalecimiento institucional pero sí habilitaba una fuerte tonalidad plebiscitaria.

Otro punto de tensión es el de la división de poderes, vista a menudo como divisionismo en desfavor de la consolidación del Estado. Cartaza y Gianforchetta citan en su informe unas declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estela Morales, que en diciembre de 2009 señaló que:

El nuevo constitucionalismo en Venezuela echa por tierra la clásica división rígida de poderes y, ahora, se erige y se fortalece el Estado para desarrollar los intereses colectivos por encima de los privilegios individualistas [...] no podemos seguir pensando en una división de poderes porque ese es un principio que debilita al Estado [...] se debe profundizar la norma constitucional vigente que obliga a las distintas ramas del Poder Público a colaborar y cooperar entre ellas. Una cosa es la separación de poderes y otra es la división (Diario *Patria Grande*, 7-12-2009).

Es en Venezuela donde han surgido más figuras legales de la democracia participativa, atendiendo a los diferentes momentos político-ideológicos por los que pasó el Gobierno de Hugo Chávez en sus once años de mandato, pero, al mismo tiempo, se dio una fuerte aversión a los movimientos autónomos (por ejemplo, sindicatos) como una amenaza al modelo socialista que se estaría implementando. En este marco, conviven expresiones genuinas de participación desde abajo¹¹⁹ con una fuerte presencia de militares en cargos políticos, con la carga de una cultura vertical de obediencia, no democrática

119 Las encuestas revelan que la percepción ciudadana —chavista y no chavista— es que desde la llegada de Chávez la participación aumentó (véase en esta publicación el informe “El futuro de la democracia en Venezuela”).

No es difícil observar un debilitamiento de los parlamentos como instancias de deliberación y articulación de intereses, en un marco de fuerte decisionismo presidencial en los tres casos analizados.

ni deliberativa (Gaudichaud 2009). En efecto, el proceso bolivariano es concebido como una alianza cívico-militar, rasgo que se ha mantenido desde el comienzo. Así, un número importante de militares activos y retirados ocupa cargos altos y medios en el Gobierno, históricamente ocupados por civiles. En las elecciones de 2004, ocho de los 24 gobernadores electos provinieron del mundo militar. Según la Asociación Civil Control Ciudadano, más de 200 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional ocupan altos cargos en el Gobierno y 2.000 oficiales se desempeñan en puestos medios y subalternos de la administración pública¹²⁰.

Ello marca una diferencia con Bolivia y Ecuador. Por ejemplo, aunque la relación de Evo Morales con las FF AA es muy cercana —y les ha hecho varias concesiones políticas, económicas y simbólicas¹²²—, son pocos los militares que ocupan cargos importantes, entre ellos el ex gobernador de Pando y contralmirante Rafael Bandejas, o los ex jefes del Ejército César López y Freddy Bersatti, ex jefe de la Aduana y ex senador, respectivamente.

Un primer experimento de dispositivos participativos fueron los Círculos Bolivarianos —pequeños grupos asentados en microterritorios y fuertemente politizados por el Presidente—, constituidos en 2001 con el objetivo de

En Venezuela conviven expresiones genuinas de participación desde abajo¹²¹ con una fuerte presencia de militares en cargos políticos, con la carga de una cultura vertical de obediencia, no democrática ni deliberativa.

poner en marcha una base política del chavismo, frente a los partidos tradicionales bajo la forma de una gran red (Commet s/f). En otras palabras, se trataba de núcleos compuestos por pocas personas y diseminados por toda la geografía estatal con un fuerte contenido electoral (Uzcátegui 2010). Los Círculos fueron juramentados por el propio jefe de Estado en un acto en diciembre de 2001, y durante el frustrado golpe de 2002 estas instancias jugaron un importante rol en la movilización de las bases de Chávez que, finalmente, lo repusieron en el poder. Al mismo tiempo, su trabajo consistió en colaborar con la implementación de las misiones sociales (ver más adelante) en los barrios populares. El hecho de que

120 Informe “El futuro de la democracia en Venezuela”, en esta publicación.

121 Las encuestas revelan que la percepción ciudadana —chavista y no chavista— es que desde la llegada de Chávez la participación aumentó (véase en esta publicación el informe “El futuro de la democracia en Venezuela”).

122 Véase Stefanoni 2010.

su primer coordinador nacional fuera el general Miguel Rodríguez Torres — hasta ese momento funcionario jerárquico de la División de Inteligencia y Seguridad Policial (DISIP)— alentó críticas sobre las motivaciones de control político de los Círculos¹²³.

En segundo lugar, en 2003 fueron creadas las misiones sociales, a las que nos referiremos en el apartado final, en la discusión sobre asistencialismo e igualdad. Más tarde nacieron los Comités de Tierras Urbanas y las Mesas Técnicas de Agua, que terminarán siendo subsumidos en 2006 en la última y más ambiciosa variante de la democracia participativa bolivariana: los consejos comunales (CC), surgidos bajo el mandato de la Constitución de 1999. A 2008, según datos de Commet, había unos 15.000 con más o menos actividad¹²⁴.

Esta forma de participación se enmarca en la tendencia del Gobierno de Chávez a generar formas de intervención estatal y participación desde abajo como instancia ad hoc de la institucionalidad vigente, la que suele ser desacreditada como ineficiente, corrupta y portadora de los vicios de la IV República. Herederos en parte de formas de asociatividad incluso anteriores al chavismo en las zonas populares, los CC se inscriben en el descrédito de los poderes públicos como “marca de identidad”. El líder comunitario puede presentarse como un “misionero local” de Chávez para construir su legitimidad en zonas con fuerte apoyo al Presidente, pero deberá también tener la capacidad para “hablar con la verdad en tanto revelación de la intimidad, la emoción o la propia experiencia (en *el barrio*)” (Commet s/f). Así, los CC se enmarcan en el discurso antiinstitucional del chavismo: “Las alcaldías no sirven hoy como deberían. Los ministros no sirven como deberían. La Asamblea Nacional no sirve como debería. Debemos revisar todos estos organismos para luchar contra la burocracia, la corrupción y la ineficiencia”¹²⁵.

En este sentido, los CC son un reflejo de la propia tensión entre la democracia asamblearia y la democracia representativa a la hora de gerenciar

123 En 2004, esta modalidad de organización entró en crisis —en medio de acusaciones cruzadas de corrupción, tráfico de influencias y autoritarismo entre dos facciones enfrentadas— y fue temporalmente reemplazada por las Unidades de Batalla Electoral destinadas a la movilización popular ante el referéndum revocatorio de ese año. Más tarde se crearon las Unidades de Batallas Endógenas Sociales.

124 Para Chávez, “Los consejos comunales [...] son disparadores del ejercicio real de la soberanía popular y un instrumento de redistribución y descentralización del poder”. *El Nacional*, Caracas, 15-10-06.

125 David Velásquez, diputado del PCV y presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, citado por Commet s/f.

recursos y poder político. En este marco, la autonomía de la que disponen los habitantes fue contrabalanceada con una recentralización administrativa de los organismos que apoyan (financieramente) su acción (Commet, s/f). Se trata, en efecto, de una conexión directa de los CC al Poder Ejecutivo, despreciando —y combatiendo— las intermediaciones políticas: los mismos deben registrarse (según el artículo 2 de la ley) en la Comisión Local Presidencial del Poder Popular. Sus capacidades efectivas suelen circunscribirse a pequeñas mejoras y cambios en los entornos que ocupan y, según la investigadora María Pilar García Guadilla (2007):

La mayoría de los CC analizados no son espacios donde se construyan nuevas subjetividades ni donde se promuevan ciudadanías y proyectos de sociedad divergentes; es decir, no son un movimiento social. No parecen tener la capacidad de movilizarse a favor de nuevas formas de ciudadanía o de derechos basados en la democracia participativa que fuera sancionada en la Constitución de 1999; tal como se ha señalado, las movilizaciones que realizan tienen un carácter reivindicativo y tienden a responder a las presiones del gobierno, lo que lleva a cuestionar su pretendida autonomía... Hasta el día de hoy, la mayoría de los CC carecen de la capacidad para ir mas allá de hacer pequeños cambios y mejoras en el entorno que ocupan. Carecen, también, de la capacidad para enriquecer las identidades sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos ya que no han generado un proyecto de sociedad autónomo, alternativo y divergente del Estado que permita la construcción de hegemonía para la transformación social.

Adicionalmente, “el hecho que la composición socio-económica de los miembros de cada CC tienda a ser [generalmente] homogénea en términos de clase social y que por lo general se trate de CC de los sectores pobres o de CC de clase media o media alta, lleva a que la participación se dé dentro de una alta polarización social y espacial que la nutre de contenidos diferentes” (*Ibid.*).

Es decir, se trata de experiencias de participación popular más bien acotadas a problemas concretos, como servicios básicos, vivienda, calles, seguridad, infraestructuras varias, etc., según las carencias de las diferentes zonas, más que una “explosión de poder popular”, base del relativamente novedoso pero igualmente etéreo socialismo del siglo XXI. Incluso sectores de clase media acomodada y antichavista han constituido consejos comunales con demandas que van desde la seguridad y problemas urbanísticos (parques y jardines)

hasta la oposición a la construcción de una urbanización en una base aérea en Caracas¹²⁶.

A partir de un trabajo etnográfico en tres CC, Commet ha constatado que en los últimos años (más o menos desde 2006-2007) existe una cierta despolitización de los consejos y un acuerdo más o menos implícito de ocuparse de los problemas locales más que de la política nacional, que “divide a la comunidad”. Incluso, muchos líderes locales se quejan de la “apatía” comunitaria. Intervenciones como “acá todos somos vecinos, para mí tú no eres chavista ni escuálido, tu eres un vecino con los mismos problemas que yo” constatan este giro en zonas populares que apoyan al Presidente. Es decir, el empoderamiento popular se ubica en

Los CC son experiencias de participación popular acotadas a problemas concretos, como servicios básicos, vivienda, calles, seguridad, infraestructuras varias, etc., más que una “explosión de poder popular”.

una situación intermedia entre la autonomía y la subordinación que depende de cada una de las experiencias concretas. Con todo, el hecho de que los CC dependan de los recursos estatales representa sin duda una fuerte vulnerabilidad en su autonomía¹²⁷. Como señala García Guadilla, “en su interior conviven tanto las oportunidades para hacer real la democracia participativa como las limitaciones para cercenarla”.

A diferencias de las figuras descritas, en Bolivia el proceso de democracia participativa se centra en mayor medida en una suerte de actualización del “cogobierno” Estado-sindicatos nacido con la Revolución de 1952, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) “cogobernó” con el MNR. A diferencia de Venezuela y Ecuador, la boliviana es una sociedad densamente organizada, por lo que bastaría —según la concepción oficial— con incorporar a las organi-

126 La pregunta más frecuente sobre los CC es: ¿cómo van a asumir la cantidad de funciones que se les ha asignado? El presidente Chávez, en el discurso con motivo de la Explosión del Poder Comunal (Cumbre Social, 2007) señaló, que además de las funciones que ya tienen, los CC podrían encargarse de la salud, la niñez, el agua, la energía, la educación y todas las funciones propias de la comunidad que en este momento están siendo desempeñadas bien sea por las instituciones educativas, de salud, del agua y de la energía con el apoyo a nivel local de los Comités de salud, las Mesas Técnicas del Agua y de la Energía y en general otras instancias de la sociedad organizada (García Guadilla, *op. cit.*).

127 Un factor adicional que afecta la autonomía de los CC de los sectores populares es la presión ejercida por el Ejecutivo para militarizarlos mediante su incorporación como reservistas del Ejército. En el acto del 5 de julio de 2007 con motivo del 191 Aniversario de la firma del Acta de la Independencia en Venezuela, tres mil doscientos sesenta y cuatro (3.264) representantes de los CC desfilaron como reservistas al lado de las Fuerzas Armadas Nacionales en el Paseo los Próceres, bajo la consigna “Patria, Socialismo o Muerte” (García Guadilla, 2007).

zaciones sociales al Estado; de allí que se utilice la figura del “Gobierno de los movimientos sociales” para definir su identidad y que la nueva Constitución aprobada en 2009 incorpore el “control social” como la fiscalización de las organizaciones sociales sobre la gestión estatal¹²⁸. De esta forma, se consolida una suerte de democracia corporativa en la que diversas organizaciones sindicales y territoriales (a las cuales el partido de gobierno está relativamente subordinado) se transforman en el canal de selección para ocupar cargos en el Gobierno, especialmente a partir de las segundas líneas del Estado. La ventaja respecto a la participación “comunitaria” es que la incidencia social llega a las políticas nacionales; la desventaja: el riesgo de desacople entre las élites sindicales y las bases.

Como señala Mayorga¹²⁹, es posible observar el desplazamiento de empresarios, tecnócratas y políticos profesionales a favor de campesinos e indígenas, dirigentes sindicales y mujeres, que hoy ocupan espacios de poder de los que estaban tradicionalmente excluidos, en un proceso que se fue profundizando al calor de las movilizaciones sociales y de los avances electorales de las fuerzas “antisistémicas”, especialmente el MAS, aunque también el MIP de Felipe Quispe.

La definición oficial del proceso como “Gobierno de los movimientos sociales” se vincula con la mencionada idea de autorrepresentación consustancial al MAS, al tiempo que plantea, en sí misma, una tensión: la erosión del Estado por las organizaciones sociales, y —al mismo tiempo— ciertos procesos de “estatización” de estas organizaciones¹³⁰. No obstante, la apuesta

128 “Otro nivel de esta presencia de los movimientos sociales se verifica en la forma de reclutamiento del personal del Estado, que obligatoriamente pasa por el filtro de los movimientos. Por último, Evo Morales como presidente está permanentemente rindiendo cuentas y plebiscitando localmente sus decisiones” Stefanoni, Ramírez y Svampa 2009. “[...] los mecanismos de selección del personal administrativo del Estado dejan de ser únicamente en función de meritocracia académica y combina otro tipo de méritos, otro tipo de calificaciones, como es el haber ayudado a los sectores sociales, el provenir de sectores sociales, el de no haber defendido dictaduras, no haber participado de privatizaciones, haber defendido los recursos públicos estatales y no estatales. Hay un mecanismo de preselección de la administración pública que pasa por sectores sociales y que combina lo meritocrático académico con otro tipo de meritocracia social, digámoslo así” (Álvaro García Linera, conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9-4-2010).

129 Informe “La democracia boliviana” en esta publicación.

130 Por ejemplo, Evo sigue siendo presidente de las Seis Federaciones (cocaleras) del Trópico de Cochabamba.

original de nombrar a los funcionarios bajo consulta con las organizaciones sociales se desvirtuó al conocerse que algunos dirigentes vendieron “avales” en varias oportunidades, a lo que se suma el bajo desempeño de varios ministros puestos en sus cargos por “las bases”, que mostraron escasa capacidad de gestión y/o un exagerado apego corporativo¹³¹. En ese marco, se observa una vuelta silenciosa a cierta lógica “legal-racional” weberiana —con los límites que tal lógica de gestión estatal encuentra históricamente en Bolivia— en detrimento del movimientismo social, mientras el “cogobierno” con las organizaciones se relega a algunos viceministerios, como el de la Coca —en permanente conflicto—, Defensa Social (control del narcotráfico) o Microempresa. Contrariamente, el área económica del gabinete fue prudentemente “blindada” y su acceso fue vedado a las organizaciones sociales.

La nueva Constitución establece una serie de figuras de democratización, entre ellas la posibilidad de revocatoria de mandato del Presidente y los gobernadores, el referéndum por iniciativa ciudadana y la segunda vuelta (en reemplazo de la elección presidencial parlamentaria cuando ningún candidato logra la mitad más uno de los votos), al mismo tiempo que incrementa la potestad del Congreso: los ministros censurados deben renunciar y basta la mayoría absoluta (y ya no la mayoría calificada de dos tercios) para revertir vetos presidenciales. No obstante, el hecho de que el MAS tenga dos tercios —junto a la dinámica de elaboración de los proyectos de ley por un grupo ad hoc dirigido por la Vicepresidencia y por la presidencia de Diputados y el escaso debate e iniciativa propia de los parlamentarios— ha provocado el mencionado debilitamiento de la deliberación parlamentaria.

Asimismo, la nueva carta magna incorpora el pluralismo jurídico —cuya aplicación no exenta de dificultades dependerá de una ley de deslinde jurisdiccional— y las autonomías departamentales, regionales e indígenas, cuya profundización choca con las mencionadas tendencias a la centralización

La definición oficial del proceso como “Gobierno de los movimientos sociales” plantea una tensión: la erosión del Estado por las organizaciones sociales y ciertos procesos de “estatización” de estas organizaciones.

131 Fue el caso, por ejemplo, de los ministros de Minería (el cooperativista minero Walter Villarroel), de Educación (el ex maestro comunista Víctor Cáceres) y de Justicia (la ex empleada doméstica Casimira Rodríguez) y, más recientemente, de la ministra de Trabajo Carmen Trujillo.

del poder¹³². La elección por voto popular de jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional (entre una terna previamente aprobada por la Asamblea Legislativa) implica en teoría una democratización del Poder Judicial, pero es necesario ver cómo funciona en la práctica el complicado equilibrio entre las fidelidades políticas y las competencias técnico-jurídicas para hacer una evaluación de estas innovaciones, tan ambiciosas como escasamente discutidas por los constituyentes. Por el momento, las debilidades de la justicia y la reforma policial pendiente revelan más continuidades que rupturas en un área en que las carencias en términos de desigualdades se revelan bastante dramáticas.

La posibilidad legal —de acuerdo a una nueva norma aprobada— de destituir a alcaldes y gobernadores con la sola acusación fiscal pone en tela de juicio el uso político de la justicia (la judicialización de la política), una antigua tradición latinoamericana que, al parecer, sigue vigente. A ello se suma la aprobación de una ley anticorrupción con carácter retroactivo, con la cual podría juzgarse incluso a los ex Presidentes.

Finalmente, la decisión de que el control social esté en manos de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), que engloba a una

En Ecuador la nueva Constitución otorga un fuerte peso a la función ejecutiva, junto a una escasa apertura y vocación gubernamental para la interlocución política con diversos movimientos sociales.

variedad de organizaciones sociales progobierno (incluyendo al MAS) ha reducido aún más las potencialidades de una “institución” que comenzó a discutirse en la Constituyente con la ambiciosa formulación del cuarto “Poder social”; no obstante, refuerza la concepción de la participación ciudadana como “cogobierno” que mencionamos con anterioridad.

En el caso ecuatoriano, se observa un fuerte peso otorgado por la nueva Constitución a la función ejecutiva, junto a una escasa apertura y vocación gubernamental para la interlocución política con diversos movimientos sociales (Ramírez Gallegos 2009), todo ello en un contexto de cierto agotamiento

132 Por ejemplo, en un audio, un diputado por Tarija se jacta de que el MAS controla el Poder Judicial y pronto hará lo mismo con el Tribunal Supremo Electoral (diario *Página 7*, La Paz, 19-11-2010). También Evo Morales se jactó de haber engañado a la oposición al aprobarse la cláusula transitoria que impediría su postulación a una segunda reelección, y el vicepresidente García Linera habló de una estrategia militar envolvente sobre la derecha. La disposición establece que el primer mandato sí cuenta, pero el Ejecutivo alega que como no se concluyó, debido a que se convocó a comicios adelantados antes de finalizar el periodo de cinco años, el primer mandato es el que va de 2010 a 2014.

de las dinámicas de movilización propulsadas por los movimientos sociales a lo largo de los años noventa y la primera parte del decenio del 2000. El eje de las figuras de la democracia participativa se materializó en la nueva carta magna aprobada en 2008 en referéndum con el 63% de los votos. Así, en Ecuador y en Bolivia parece haber menos instituciones ad hoc de la “democracia popular” que en Venezuela. Así resume los cambios Alberto Acosta:

La participación ciudadana es un eje transversal de la nueva Constitución: no ha existido en la historia republicana del Ecuador una Constitución que otorgue semejante prioridad al papel de los ciudadanos en la vida democrática y en la gestión y control de los asuntos públicos. Es una de las constituciones más participativas de América Latina.

Se amplía la comunidad de ciudadanos que pueden participar directamente en la vida democrática del país. Podrán votar jóvenes de 16 a 18 años, migrantes, extranjeros, militares y policías, y reos sin sentencia. Se reconocen todas las formas de participación individual y colectiva y las diversas formas democráticas del país: por primera vez se reconoce la democracia comunitaria además de la democracia directa y representativa.

La soberanía popular se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de democracia directa. Faculta a los ciudadanos a presentar proyectos de ley, ordenanzas o resoluciones y a exigir que se traten, a presentar propuestas de reforma constitucional y de consultas populares, incluso revocar el mandato de cualquier autoridad, incluido el Presidente. La ciudadanía puede participar a lo largo de todo el ciclo de elaboración de las políticas públicas tanto a nivel nacional como local: en la planificación, presupuestación, gestión, control y evaluación de las políticas¹³³.

La planificación participativa se eleva a principio constitucional a nivel local y nacional

La ciudadanía formará parte del Consejo Nacional de Planificación. Se crean los consejos ciudadanos como instancias de deliberación de los grandes lineamientos del desarrollo nacional. Se fijan los consejos en todos los niveles de gobierno con participación ciudadana. Se crea la silla vacía como forma de participación en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Los ciudadanos participan desde allí en la toma de decisiones de los gobiernos locales. El pueblo puede

133 Acosta, entrevista personal, 17-11-2010.

134 Acosta, entrevista personal, 17-11-2010.

revocar el mandato de todas las dignidades que ha elegido, incluido el Presidente. Esto no constaba en la Constitución de 1998. Con 15% de firmas se puede solicitar la convocatoria a consulta para la destitución presidencial¹³⁴.

En Ecuador existe una fuerte sensibilidad republicana en las nuevas élites gobernantes expresada en la propia denominación de Revolución Ciudadana para el proceso de cambio en marcha, situación que contrasta con Bolivia, donde el término “república” es asociado a “colonialismo interno” (los Gobiernos liberales con posterioridad a la independencia fueron más agresivos frente a las comunidades indígenas que las administraciones coloniales¹³⁵). A diferencia del Gobierno de Evo Morales —donde escasean los cuadros técnico-ad-

En Bolivia el término “república” es asociado a “colonialismo interno” ministrativos, provenientes a menudo de ONG—, en la administración de Correa abundan los jóvenes profesionales con estudios de posgrado en el exterior y una fuerte cultura cosmopolita en consonancia con la propia historia de vida del Presidente, formado como economista en Estados Unidos. Se trata, según Ramírez Gallegos, de “un amplio abanico de clases medias, algunas muy radicalizadas, activas y cercanas [a los sectores indígenas-populares] en las movilizaciones contra el neoliberalismo” cuyo ingreso a altos cargos estatales quebró el dominio de las elites y los partidos tradicionales (Ramírez Gallegos 2010b).

En este marco, una de las figuras clave de la participación, establecida por la nueva carta magna, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), compuesto por ciudadanos voluntarios propuestos por ciudadanos y organizaciones sociales —pero no por los partidos políticos— y sin participación del Poder Legislativo en su elección¹³⁶. Como ya señalamos, se trata de una nueva institucionalidad democrática (aún embrionaria) “moldeada a la luz de la desconfianza política”.

El CPCCS, además de coadyuvar a los procesos de veeduría ciudadana y control social, tiene específicas y complejas tareas, como “investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción”, “emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad e impulsar las acciones

135 El llamado “pacto colonial” garantizaba la propiedad comunitaria mientras los indígenas cumplieran con una serie de “deberes”, como la mita en las minas y el pago del impuesto indígenal. Aunque con la Constitución de 2009 se mantiene la división de poderes republicana, se reemplazó el nombre de República de Bolivia por Estado Plurinacional; por varias razones, el término Estado sí goza de una connotación fuertemente positiva.

136 Seguimos en esta parte a Ramírez Gallegos 2009.

legales que correspondan” e, incluso, “actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus acciones”. Todo ello supone una ampliación y un reforzamiento de los poderes y las competencias que se había otorgado, doce años antes, a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). Como entonces, el Consejo diseñado en Montecristi (sede de la Constituyente) se funda en la existencia de múltiples interfaces entre la institución pública de control y las iniciativas sociales de denuncia y exigencia de transparencia, rendición de cuentas y garantía de la vigencia de la ley. Incluso, este Consejo tendrá a su cargo la designación de autoridades a partir de la Comisiones Ciudadanas de Selección (CCS).

De la negociación interpartidaria para la designación de gran parte de las autoridades se pasa, así, a la puesta en marcha de concursos públicos, sujetos a veeduría ciudadana y gestionados por una innovadora instancia mixta estado-sociedad (Ramírez Gallegos 2009). Las CCS estarán compuestas por un representante de cada una de las cinco funciones del Estado y por igual número de ciudadanos elegidos al azar entre una lista de voluntarios que deberán cumplir con algunos requisitos específicos —un “ciudadano” presidirá la comisión y otro tendrá un voto dirimente—. Una institucionalidad que va en la mencionada dirección de despartidizar la selección de una serie de las máximas autoridades estatales, una diferencia que, al menos en el terreno de las intenciones, se verifica con Venezuela y Bolivia.

No obstante, como señala Acosta “Los espacios de participación están legal y constitucionalmente establecidos. [Pero] en la práctica, por un manejo político muy centrado en el Presidente, aquellos no tienen mayor trascendencia”¹³⁷. En efecto, la Constitución funcionaría como una suerte de luz verde a la participación, cuya concreción dependerá de una serie de factores, incluyendo la propia propensión ciudadana a la participación. Una síntesis de las visiones enfrentadas se puede observar en el referéndum de mayo de 2011, el cual dejó en evidencia las tensiones entre el discurso oficial acerca de la separación de la justicia de la política (una demanda democrática muy pertinente) y quienes leen las reformas como una colonización del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo (lo que no es ajeno a cierta voluntad “jacobina” de los actuales procesos nacional-populares)¹³⁸.

Muchos de los discursos políticos sobre la democracia participativa dan por supuesto que los ciudadanos quieren participar en los asuntos públicos,

137 Entrevista personal, 17-11-2010.

138 Véase revista *La Tendencia*, febrero-marzo 2011. Disponible en: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2011,11.pdf>

En Ecuador la Constitución funcionaría como una luz verde a la participación, cuya concreción dependerá de una serie de factores, incluyendo la propia propensión ciudadana a la participación.

dejando a menudo de lado la compleja sociología de la participación —y de la no participación— y de los incentivos necesarios para ello, un tema tan relevante como poco discutido. Adicionalmente, ¿es posible que las asociaciones de ciudadanos den un piso de participación estable capaz de reemplazar a los partidos?, ¿hasta qué punto esta visión “ciudadanista” va de la mano de una cierta posición posideológica de la política, que choca incluso con las posiciones del Ejecutivo ecuatoriano?, ¿en qué instancias de la sociedad civil quedaría la función de agregación de intereses que, al menos en teoría, cumplen los partidos?, ¿bastan para ello ciudadanos y “organizaciones sociales”?

Los esfuerzos por reorganizar y fortalecer Alianza País se vinculan con la necesidad de dar más consistencia a la base política de la Revolución Ciudadana y, posiblemente, con las conclusiones acerca de la crisis del 30-S cuando, pese a ser bastante enérgica, la movilización popular no fue tan masiva como lo daría a entender el apoyo difuso —pero efectivo— a Correa en las encuestas de opinión.

Asistencialismo o igualdad: ¿Qué inclusión social?

La voluntad de salir del rentismo se expresó en Venezuela en la fórmula de Arturo Uslar Pietro, “sembrar petróleo”, que apuntaba a reinvertir los recursos de la renta petrolera en sectores productivos de la economía, especialmente en la agricultura (y esa agenda sigue siendo el pilar del nacionalismo también en Ecuador y Bolivia, donde bastaría con reemplazar petróleo por gas). Pero —como demuestra la historia— no es fácil salir del extractivismo, y no alcanza para ello la voluntad presidencial; muchas fuerzas se estructuran alrededor de los intereses que sedimenta. Hoy Venezuela es uno de los mayores importadores de alimentos de toda América Latina; por un monto de más de 5.000 millones de dólares¹³⁹. Pero lo mismo pasa en Bolivia y en gran medida en Ecuador, cuya economía, además, sigue dolarizada.

El modelo actual realmente existente en los tres países podría definirse como una combinación de extractivismo —con una mayor presencia estatal,

139 <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/importaciones-de-alimentos-en-venezuela-ascenderan-us6500m-en-2011>.

vía procesos de nacionalización¹⁴⁰— y democratización en el reparto de la renta hidrocarburífera mediante políticas sociales más o menos institucionalizadas y más o menos universalistas. En general, se apuesta por políticas de transferencia directa de renta (bonos) e infraestructura social (salud, educación, alimentos a bajo costo, etc.). Pero a pesar de los discursos —que transmiten mucho de ilusión desarrollista/industrialista— hay pocos avances en la elaboración de una agenda posextractivista de mediano o inclusive de largo plazo. Ahí es necesario marcar una diferencia en Ecuador, donde el impacto de las críticas ecologistas (y la propuesta de alternativas) es muy superior que en Bolivia o Venezuela.

El nuevo “sistema económico comunal” venezolano presenta varias dudas, vinculadas en gran medida al fracaso de la anterior apuesta por las cooperativas, cuando los ingentes subsidios estatales no alcanzaron para hacer funcionar al nuevo sistema (Saint-Upéry 2008a). Las empresas comunales no pagarán impuestos —al menos “por un tiempo”— y, según el diputado Alfredo Murga, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, “en una sana administración tributaria no hace falta ese pago, para eso está la renta petrolera”. Agregó que “durante mucho tiempo estará la transición en la que coexistirán los modos de producción no capitalistas con los capitalistas, y eso será hasta que la madurez de la sociedad vaya extinguiendo esas formas capitalistas. El esquema de producción capitalista no se eliminará de un plumazo”. Y otro diputado de la misma comisión señaló que en las empresas comunales “no habrá privilegios, no habrá posiciones jerárquicas y todos percibirán lo mismo por igual” (Armas H. 2010). ¿Este proyecto constituirá, entonces, otro experimento “poscapitalista” sustentado en la renta petrolera?

De allí que la pregunta se vincule a la sostenibilidad de las políticas implementadas, sus niveles de institucionalización y su impacto sobre las condiciones de vida de los sectores más pobres.

El modelo existente en los tres países sería una combinación de extractivismo y democratización en el reparto de la renta hidrocarburífera mediante políticas sociales más o menos institucionalizadas y más o menos universalistas.

140 Con todo, algunos sectores acusan a Chávez de debilitar la nacionalización de los setenta con los contratos de asociación con empresas transnacionales (véase sitio web www.soberanía.org)

Es en Venezuela donde se han ensayados más políticas, aunque también es el país —de los tres— donde estos emprendimientos han estado más desarticulados de la institucionalidad vigente. En Bolivia y Ecuador las medidas han sido menos creativas, en parte más modestas, aunque se han articulado como nuevos derechos en las leyes y/o Constituciones.

En Venezuela se han ensayados varios mecanismos —en la primera etapa, “operativos cívicos militares”— para llevar adelante “procesos de inclusión masivos y acelerados” a través de “una distribución más justa de la renta petrolera”. Los críticos del rentismo hablan de la “cultura de campamento”, en la que predominan los operativos extraordinarios sin continuidad en el tiempo (Uzcátegui 2010). Pero fue el propio Chávez quien, admitiendo implícita-

**Fue el propio Chávez quien definió
a su proyecto en marcha como
“socialismo petrolero”.**

mente el fracaso de una agenda de desarrollo poshidrocarburífera y definió al proyecto en marcha como “socialismo petrolero”. Durante el programa Aló Presidente 288, el mandatario venezolano explicó que “estamos empeñados en construir un modelo socialista muy diferente al que imaginó Marx en el siglo XIX. Ese es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera”. Afirmó, además, que “El socialismo petrolero no se puede concebir sin la actividad petrolera” y que este recurso “le da una configuración peculiar a nuestro modelo económico”¹⁴¹.

El objetivo socialista —aunque se use una fórmula del utilitarismo del siglo XIX— es maximizar la felicidad social (*la felicidad más grande para el mayor número de personas*). Y en ese marco, la receta más exitosa para este fin fueron las misiones sociales, con mucha repercusión dentro y fuera de Venezuela y cuyo comienzo está fechado en 2003. Las razones de su implementación estuvieron vinculadas con la coyuntura política y el propio Chávez relacionó la implementación de las misiones con las encuestas que le daban perdedor para el revocatorio convocado para 2004 a iniciativa de la oposición:

Ustedes deben recordar que, producto del golpe y todo el desgaste aquel, la ingobernabilidad que llegó a un grado alto, la crisis económica, nuestros propios errores, hubo un momento en el cual nosotros estuvimos parejitos [con respecto las fuerzas de oposición], o cuidado si por debajo. Hay una encuestadora internacional recomendada por unos amigos que vinieron a mitad del 2003, pasaron como dos meses aquí y fueron a Palacio y me dieron la noticia bomba: “Presidente, si

141 “Chávez: Estamos construyendo un socialismo petrolero muy diferente del que imaginó Marx”, Prensa de PDVSA, 29-7-2007, Aporrea: <http://www.aporrea.org/ideologia/n98719.html>

el referéndum fuera ahorita usted lo perdería”. Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello... Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: “Mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza” y me dijo: “Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo.” Y empezaron a llegar los médicos [cubanos] por centenares, un puente aéreo, aviones van, aviones vienen y a buscar recursos... Y empezamos a inventar las misiones... y entonces empezamos a remontar en las encuestas, y las encuestas no fallan...¹⁴².

Y no fallaron. Chávez fue ampliamente ratificado en 2004, lo que fue un bumerán para la oposición, al tiempo que las misiones se volvían el eje de la política social bolivariana. Incluso algunos críticos de Chávez admiten que tuvieron un efecto positivo, al menos en sus inicios. Amplia cobertura, autoorganización y empoderamiento social, grandes montos invertidos... La Misión Barrio Adentro buscó resolver las carencias en la esfera de la salud (sobre todo con médicos cubanos, que Fidel Castro “exportó” en abundancia); las misiones Robinson, Ribas y Sucre se encargaron de la alfabetización y la continuidad educativa, la Misión Mercal de proveer alimentos a bajo precio en un contexto de creciente inflación, la Misión Hábitat para el hábitat urbano, y la Misión Vuelvan Caras de la capacitación laboral. Todas ellas tuvieron un fuerte impacto en las barriadas populares: una cobertura del 50% de la población en la Misión Mercal y un 30% la Misión Barrio adentro entre 2004 y 2006 según los investigadores D’ Elia y Quiroz. Para 2007, según datos de la Encuesta de Presupuesto y Gastos Familiares —citada por los mismos autores— el 48% de la población se benefició de al menos una de las misiones¹⁴³.

La primera crítica es —como mencionamos— el carácter ad hoc de la institucionalidad vigente (en general, son financiadas por PDVSA), lo que se justificó en el oficialismo por la necesidad de evitar las trabas burocráticas y optar por la celeridad (el viejo Estado aparece a menudo como una traba para la revolución, que se resuelve creando institucionalidades paralelas y no poco inestables en términos de continuidad). Pero desde 2006 se suma el hecho de un debilitamiento del propio sistema de cobertura de las misiones, entre otras razones por la disminución de los médicos cubanos y del financiamiento (hoy Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que no crece y mantiene una elevadísima inflación, cercana al 30% anual, con desabastecimiento

142 Marta Harnecker, *Intervenciones del Presidente el día 12 de noviembre del 200*, citada en Uzcátegui 2010.

143 Informe “El futuro de la democracia en Venezuela”, en esta publicación.

de productos¹⁴⁴). El propio Chávez reconoció en 2009 que “la Misión Barrio Adentro ha venido bajando el nivel de eficiencia que tuvo siempre. Estamos estudiando el tema, las razones, las causas”. Algo similar ocurrió con el Mercal debido también a la disminución de su financiamiento (puntos de venta, provisión de productos, etc.).

En síntesis, más allá de la descripción puntual de cada caso, se trata de una dificultad más estructural: la desinstitucionalización de las políticas sociales, los financiamientos a través de mecanismos extrapresupuestarios dispersos (sumados a la baja ejecución, la poca transparencia y los altos costos operativos) y la dificultad para incluirlas en un nuevo tipo de Estado con previsibilidad en el mediano plazo más allá de los vaivenes políticos coyunturales.

Así, se observa mejoras en los niveles de pobreza hasta 2007, cuando los guarismos tienden a estabilizarse. Pero el período de auge de las misiones coincidió parcialmente con un crecimiento de la producción y el consumo, que impulsó el crecimiento del empleo y el salario real: entre 2004 y 2007

el efecto bonanza de la renta petrolera fue superior al ciclo expansivo de los precios de la década de los setenta. Pese a ello, la inserción laboral siguió siendo precaria. Al mismo tiempo, el sistema de salud formal ha enfrentado su peor crisis entre 2008 y 2009 y las propias autoridades reconocieron el colapso

funcional del sistema sanitario (incluyendo casos de cierre por migración del personal médico, el mal estado de la infraestructura y la insalubridad y la inseguridad)¹⁴⁵. A ello se suman niveles muy elevados de inseguridad ciudadana que afectan sobre todo a los sectores populares.

Esta dificultad para separar el impacto de las políticas sociales del propio *boom* económico derivado del precio de las materias primas es clara en el caso de Bolivia, cuya economía sufre el viento de cola a favor, derivado de los altos precios de los hidrocarburos y los minerales. Como dice la publicidad oficial, Bolivia volvió a ser una potencia minera. Es decir, estamos en la parte alta del ciclo rentista de una economía en la que casi alrededor del 80% de sus exportaciones son explicadas por el gas, la minería y la soya.

144 2010 cerró con una contracción del 1,7% y con una inflación del 27,2%. 2011 podría ser el primer año con crecimiento positivo desde 2009. <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/venezuela-espera-crecimiento-de-economia-de-5-en-2011>

145 Informe “El futuro de la democracia en Venezuela”, en esta publicación.

Como anticipamos, el eje de las políticas sociales de Evo Morales son los bonos de transferencia de renta, financiados con recursos hidrocarburíferos, con un criterio relativamente universalista e institucionalizado. Uno de sus principales soportes es el programa de bonos destinados a la niñez, a los ancianos y a las mujeres embarazadas. En un país con una amplia mayoría de la población en la economía informal urbana o en la actividad rural, uno de los sectores más vulnerables es, sin duda, el de los ancianos, sin acceso a la jubilación. En este contexto, el actual Gobierno amplió la cobertura del Bonosol —creado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en los años noventa— a las personas mayores de sesenta años, lo rebautizó como Renta Dignidad y lo paga mensual en lugar de anualmente. El monto asciende a doscientos bolivianos —equivalentes a unos 30 dólares estadounidenses— por mes. En el caso de las políticas previsionales, la nueva redujo la edad jubilatoria a 58 años e incorporó una renta solidaria incluyente en el marco del sistema de capitalización individual, en el marco del reemplazo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) privadas por una suerte de gran AFP estatal y la constitución de un fondo solidario mediante aportes laborales y patronales para sostener una renta mínima. Todo ello en el contexto de una política macroeconómica “prudente”, inflación bajo control y aumentos salariales moderados.

En el caso de la niñez, se ha implementado el Bono Juancito Pinto, inscrito en la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrollo, que consiste en un pago de 30 dólares anuales a los alumnos de escuelas primarias públicas a cambio de mantenerse en el sistema educativo. Dado que se trata de un monto bajo, su impacto es mayor en las áreas rurales, donde los niveles de pobreza y deserción escolar son más elevados y los de circulación monetaria más escasos.

Más recientemente se ha creado el Bono Madre, Niño y Niña Juana Azurduy para mujeres embarazadas, que reciben 50 bolivianos (unos siete dólares) por cada control prenatal, con un máximo de cuatro, además de 120 bolivianos (17 dólares) por controles posparto y 125 bolivianos por controles médicos de los niños y niñas menores de dos años, para reducir los índices de mortalidad materno-infantil¹⁴⁶. Estas políticas alentaron a otros sectores a re-

Existe dificultad para separar el impacto de las políticas sociales de Evo Morales del propio boom económico derivado del precio de las materias primas.

146 Organizaciones indígenas han denunciado que los condicionamientos del bono impiden el acceso de los habitantes de regiones donde no hay servicios sanitarios.

clamar políticas estatales de apoyo, como los discapacitados, que ahora se benefician de la Misión Solidaria Moto Méndez. Esta misión —con apoyo cubano y venezolano en el marco de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba) y, como las anteriores políticas sociales, de las FF AA bolivianas—, entrega “ayuda técnica”, como sillas de ruedas, muletas, colchones especiales, etc., luego de una revisión médica. Igualmente, en el marco del Alba, hay en Bolivia varios centenares de médicos cubanos, y se impulsa el programa Misión Milagro, destinada a operar gratuitamente de cataratas y otras enfermedades de la vista, con un fuerte impacto en la población más postergada. Adicionalmente, el Programa Desnutrición Cero, destinado a los menores de cinco años, busca incidir en uno de los problemas serios de Bolivia, la elevada pobreza extrema, inicialmente en los municipios más postergados del país.

Empero, todo ello no es suficiente para mejorar consistentemente los niveles de vida. Aunque durante la gestión de Evo el ingreso per capita subió a 1.363 dólares anuales frente a 942 en 2001 (Bolivia pasó a ser un país de ingresos medios), la pobreza continúa elevada, pese al efecto benéfico de los bonos. Entre 2005 y 2009, la pobreza nacional bajó levemente del 60,6 al 58,3%; la rural del 77,6 al 73,8%. La pobreza extrema bajó del 38,2 al 31,9%¹⁴⁷ (62,9 a 52,7% en el campo)¹⁴⁸. Todo lo cual deja en evidencia las limitaciones del modelo primario exportador, aunque se democratice parcialmente el reparto de la renta, y plantea la necesidad de avanzar en un nuevo modelo productivo.

Según el CEDLA, “en 2009, el 31% de los trabajadores ganaba menos del salario mínimo [100 dólares] y el 60% menos de dos salarios mínimos, ni siquiera el equivalente al costo de una canasta normativa alimentaria”. Aunque el Gobierno ha revertido algunas políticas de flexibilidad laboral,

Los bonos que el Gobierno entrega en Bolivia no son suficientes para mejorar consistentemente los niveles de vida.

esto solo afecta al sector formal de la economía, pero según datos del citado informe, la tasa de empleos informales asciende al 62% y apenas 23% de los trabajadores asalariados pertenece a un sindicato (51 de cada cien en el sector público y 14 en el sector privado) (CEDLA 2009). Las remesas de migrantes ayudan parcialmente: representan alrededor del 5% del producto interno bruto (PIB).

147 Así, se vuelve a los valores de 2003-2004.

148 Udape, Ministerio de Economías y Finanzas. Para más datos de indicadores de desarrollo humano véase *La Razón*, La Paz, 11/6/2010. Disponible en: <http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3311&a=1&EditionId=103>

En el ámbito rural, el Gobierno se comprometió a implementar un seguro agrícola contra desastres naturales, al tiempo que en 2006 fue aprobada la Tarifa Dignidad, que reduce un 25% la facturación de energía eléctrica a los usuarios cuyo consumo no supera los 70 kilovatios/hora al mes en el área urbana, y 30 kilovatios/hora al mes en el campo.

También se ha impulsado la campaña de alfabetización con el método cubano “Yo sí puedo”, que al concluir declaró a Bolivia libre de analfabetismo. No obstante, pese al éxito logrado por esta iniciativa, a la que se sumaron municipios oficialistas y opositores, su continuación, “Yo sí puedo seguir”, se muestra más débil, escasa de la mística inicial, lo que pone en riesgo los éxitos alcanzados dado que, en gran medida, el analfabetismo en Bolivia es funcional.

Tampoco se observan grandes transformaciones importantes en salud, más allá de la labor positiva pero ad hoc de los médicos cubanos presentes en zonas populares bolivianas, y sigue pendiente la aprobación por el Parlamento de un seguro universal de salud (actualmente en discusión en el Congreso), lo que debiera ocurrir ahora que el MAS tiene la mayoría absoluta, y cumplir así con el texto constitucional, que reza: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. El Estado garantiza el acceso al seguro universal de salud”.

Así, las políticas sociales logran algo de distribución de renta y bastante de compensación simbólica (Evo Morales, ministros y militares salen en masa a pagar el Juancito Pinto billete en mano) entre los sectores tradicionalmente excluidos. Pero estas políticas —aunque ya se transformaron en derechos subjetiva y legalmente— están lejos de dibujar un proyecto de sociedad más integrado, y a menudo el propio Evo Morales confunde el carácter necesario y urgente de estas medidas de transferencia (moderada) de renta con el horizonte al que debería llegarse con una discusión más amplia de la integración y la justicia social. Como ha señalado la socióloga económica Fernanda Wanderley “preocupa la forma fragmentaria de enfrentar los problemas” y el hecho de que, en muchos casos, el acceso a la distribución dependa de la capacidad de presión sectorial. Así, las trabajadoras domésticas —el grupo emblemático de los legados del colonialismo y de la discriminación de género,

Las políticas sociales logran en Bolivia algo de distribución de renta y bastante de compensación simbólica entre los sectores tradicionalmente excluidos, pero están lejos de dibujar un proyecto de sociedad más integrado.

etnia y clase— sigue esperando la reglamentación de su ley específica desde 2003, mientras que sectores como las cooperativas mineras o los militares han logrado tratamientos específicos (Wanderley 2010a).

Todo ello introduce el problema de la creación de empleo productivo y mayores esfuerzos en materia educativa (más allá del exitoso programa de alfabetización). Una discusión que hoy se encuentra ubicada entre la ilusión desarrollista (grandes industrias, incluyendo “represas monstruosas” en la Amazonía (G. Linera) e “inmensas centrales nucleares” en el salar de Uyuni (diario estatal *Cambio*) y las ilusiones comunitaristas de construir una nueva civilización no occidental y poscapitalista desde Bolivia (el *vivir bien*) (Wanderley 2010b).

En la misma línea, en Ecuador se ha optado por las políticas de transferencia de renta, aunque también se ha logrado aprobar una reforma impositiva progresiva (algo que no se discutió en Venezuela y Bolivia, donde predomina más fuertemente la economía rentista y se trata de distribuir más que de redistribuir; es decir, importa esencialmente cuánto pagan las empresas petroleras, lo que determinará la masa de la renta disponible).

El eje de la redistribución ha sido el aumento del Bono de Desarrollo Humano —un programa que tiene como beneficiarios a los hogares pobres y extremadamente pobres, que existía desde hace una década— de 15 a 35 dólares mensuales entre 2007 y 2010. Al tiempo que se promueve hacer de los receptores del bono sujetos de crédito ante el sistema financiero¹⁴⁹ (los créditos blandos aparecen como un mecanismo de integración social en los tres países).

En la misma línea, se duplicó el Bono de la Vivienda de 1.800 a 3.600 dólares (en el sector rural llegó a 3.960) y se creó un bono para las personas que se ocupan del cuidado de personas discapacitadas. Por otro lado, se ha continuado con un subsidio universal del gas doméstico y de la gasolina y

Ecuador también ha optado por las políticas de transferencia de renta, aunque ha logrado además aprobar una reforma impositiva progresiva.

se ha promulgado tarifas diferenciadas en los servicios públicos (Ramírez Gallegos 2010b). La “tarifa de la dignidad” (electricidad) disminuye a la mitad el valor de cada kilovatio hora para los sectores de bajo consumo y eleva

dicha tarifa a los sectores medios y medios altos. Finalmente, en el marco de la lucha contra la inflación y los efectos de la crisis alimentaria y económica de 2008 y 2009, el Gobierno fijó subsidios directos a ciertos productos e insumos

149 El Gobierno ofrece la posibilidad de obtener un préstamo de hasta \$US 360 anuales a los beneficiarios del bono.

(harina de trigo, agroquímicos, urea); intervino sobre el precio de productos de fuerte incidencia en la canasta popular (arroz, maíz, leche y pan); y acordó con el sector privado ciertos descuentos en precios al consumidor.

En el campo de la salud, se eliminaron los costos de las consultas médicas, se amplió el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la jornada de atención diaria a ocho horas. Pero lo más importante es el incremento de la inversión social como porcentaje del presupuesto general del Estado. Esta pasó del 18% en el ciclo 2001-2006 al 24% en la actualidad, y se espera que llegue a un 7,9% en 2010 (4,8% en relación al PIB en el año 2006 a 8,1% en el año 2009) (Ponce y Acosta 2010). En paralelo, se ha invertido la relación gasto social/servicios de deuda (la inversión social pasó a ser 2,63 veces más que el servicio de la deuda) y, al mismo tiempo, puede verse una mejora del salario real.

En Ecuador lo más importante es el fuerte incremento de la inversión social como porcentaje del presupuesto general del Estado.

Estas políticas han permitido reducir la pobreza (de 37% en 2006 a 33% a mediados de 2010) y la pobreza extrema (de 16 a 14%); es decir, la reducción se ha vuelto más lenta que en ciclos anteriores (e incluso se ha estancado después de una fuerte disminución entre 2000 y 2006), aunque se ha reducido la desigualdad medida con el índice de Gini. Y el aumento de la pobreza entre los indígenas entre 2006 y 2009 muestra los límites de las políticas públicas de inclusión¹⁵⁰.

En general no es difícil observar un hiato no pequeño entre las políticas sociales efectivamente aplicadas (progresivas pero limitadas en términos de un nuevo pacto social y fiscal) y los discursos “radicales” de los nuevos Gobiernos “socialistas del siglo XXI”. En efecto, las políticas sociales siguen atadas al ciclo expansivo de los precios internacionales de las materias primas, una variable exógena a estas administraciones.

Al igual que en los casos boliviano y venezolano, la discusión deriva al problema microeconómico de cómo generar empleo productivo y de calidad.

150 Ponce y Acosta 2010. La ministra Nathalie Cely, en carta pública dirigida a la revista *Vanguardia*, donde se publicó un resumen del artículo de Ponce y Acosta, rebate los argumentos, basándose en algunas de las cifras que los autores emplean, para afirmar que “la pobreza de los indígenas no aumentó como se afirma en la versión que circuló en su revista, al contrario, se redujo entre 2008 y 2009”. Manuel Chiriboga Vega sintetiza que: “más allá de la discusión sobre si se redujo o no la pobreza entre la población indígena y rural, lo cierto es que se avanzó poco y esto nos debe hacer pensar que reducirla es una de las tareas nacionales más importantes” (“Discusiones sobre pobreza”, periódico *El Universo*, 28-11-2010).

Aunque no desdeñan los avances en la aplicación de políticas públicas diferenciadas de las concepciones neoliberales de los años noventa, Ponce y Acosta (2010) enfatizan para el caso ecuatoriano que

Si bien es positiva la política macroeconómica contracíclica adoptada por el gobierno en medio de la crisis, no se ve una propuesta productiva que aliente al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a los emprendimientos comunitarios y asociativos. No asoman estos sectores en la primera línea de preocupación del gobierno, siendo como son los mayores generadores de empleo y a la vez eficaces mecanismos para la redistribución del ingreso. No se ve que han sido integrados en un esfuerzo estratégico que sume esfuerzos y no los subyugue a lógicas clientelares, que conducen, muchas veces, a beneficiar a los grupos económicos más grandes.

Finalmente, los países que transitan caminos posneoliberales se enfrentan al mencionado problema del rentismo: ¿cómo ir reduciendo transicionalmente la centralidad del sector extractivo y agroexportador, e incentivar la innovación científica y tecnológica¹⁵¹? ¿Cómo combinar las necesidades “de caja” de corto plazo —que alientan el extractivismo¹⁵²— con visiones de mayor alcance en término de proyectos de país? ¿Cómo articular el nuevo desarrollismo en marcha con el debate sobre la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo?

El caso del ITT-Yasuní en Ecuador es, no obstante, un ejemplo de la mencionada fuerza de las críticas ambientalistas, aunque se trata de una iniciativa puntual: mediante un fideicomiso se han recogido aportes (que buscan llegar al 50% de lo que se conseguiría explorando esas riquezas petroleras) para dejar el petróleo bajo tierra. También Ecuador parece la excepción (al

Los países que transitan caminos posneoliberales se enfrentan al problema del rentismo: ¿cómo ir reduciendo transicionalmente la centralidad del sector extractivo y agroexportador, e incentivar la innovación científica y tecnológica?

menos “en el papel”) en la reflexión acerca de una economía posextractiva del conocimiento, en la búsqueda de articulaciones entre las diferentes dependencias estatales (la SENPLADES, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el SENESCYT, y el Instituto Nacional de Preinversión) y

151 Véase, por ejemplo, Eduardo Gudynas, “Camino para las transiciones post extractivistas”, en línea: <http://transiciones.org/publicaciones/GudynasCaminoPostExtractivismoPeru11.pdf>

152 Como señaló Evo Morales, “Muchos no quieren que explotemos petróleo [en la Amazonía]... entonces, ¿cómo vamos a pagar el bono Juancito Pinto?”

la transformación en la educación superior para avanzar hacia estos objetivos. Un ejemplo es el proyecto de Ciudad del Conocimiento a partir de un acuerdo con Corea del Sur¹⁵³.

En Venezuela y Bolivia (donde el plan es el desarrollo de las industrias de base) se observa una debilidad de las fuerzas y articulaciones para complejizar el debate del desarrollo, lo cual agrega interrogantes sobre el futuro de la transición posneoliberal. Dudas, todas ellas, que no cancelan las potencialidades de los cambios en marcha pero matizan las posiciones más entusiastas sobre la superación del neoliberalismo y sobre todo la apertura de senderos poscapitalistas.

153 <http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/603>

Bibliografía

- AA VV (2004). *Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez*, Quito: Planeta.
- Acosta, Alberto (2010). “Maldiciones que amenazan la democracia”, en *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, septiembre-octubre.
- Archondo, Rafael (2009). “Las ambivalencias del etnonacionalismo”, en *Le Monde Diplomatique*, edición boliviana, La Paz, agosto.
- Armas H., Mayela (2010). “En las empresas comunales se eliminará división del trabajo”, periódico *El Universal*, Caracas, 30-6-2010.
- CEDLA (2009). “¡No hay derecho!”, Informe CEDLA. La Paz: CEDLA.
- Commet, Mathieu (s/f) “Les conseils communaux au Venezuela. Vision et pratique de la démocratie participative sous la Révolution bolivarienne”. Tesis de maestría, Institut d’Études Politiques de París.
- Coronil, Fernando (2009). “¡Es el petróleo, estúpido! Petróleo y revolución una visión general”, en Mario Ayala y Pablo Quintero, *Diez años de revolución bolivariana. Historia, balance y perspectivas (1999-2009)*. Buenos Aires: Maipue.
- Do Alto, Hervé y Pablo Stefanoni (2010). “El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa”, en AA VV, *Mutaciones del campo político en Bolivia*. La Paz: PNUD Bolivia e IDEA Internacional.
- García Guadilla, María del Pilar (2007). “El poder popular y la democracia participativa en Venezuela”. Disponible en: www.nodo50.org/elliberario/PDF/consejoscomunales.pdf
- Gaudichaud, Franck (2009). “Conversación con el politólogo Edgardo Lander, después de diez años de ‘Revolución Bolivariana’: El proceso bolivariano y las tensiones de un proyecto alternativo”, en *Contretemps/Rebelión*, 4-2-2009.
- Laclau, Ernesto (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: FCE.
- Long, Guillaume (2010). “El ‘lumpen golpe’ en Ecuador”, en *Le Monde Diplomatique*, edición boliviana, octubre 2010.
- López Maya, Margarita (2005). *Del viernes negro al referendo revocatorio*. Caracas: Alfadil.
- Mayorga, Fernando (2009). *Antinomias. El azaroso camino de la reforma política*. Cochabamba: CESU-UMSS.

- Molina, Fernando (2009). *El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales*. La Paz: ediciones Pulso.
- Ponce, Juan y Alberto Acosta (2010). “La pobreza en la ‘revolución ciudadana’ o ¿pobreza de revolución?”, en Periódico *Vanguardia*, Quito, 15 al 21 de noviembre del 2010 (reproducida en *Rebelión*).
- Ramírez Gallegos, Franklin (2010a). “Desencuentros, convergencias y polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales”, en *Nueva Sociedad* 227, Buenos Aires, mayo-junio.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2010b). “Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana”, *Revista Temas y Debates* 20, año 14, octubre 2010b, Universidad Nacional de Rosario y CLACSO.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2010c). “El día más triste de Ecuador”, en *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, noviembre 2010.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2009). “Participación y desconfianza política en la transformación constitucional del Estado ecuatoriano”, ponencia presentada en el seminario Reforma del Estado en los países andinoamazónicos. La Paz: IFEA y PIEB, junio.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2005). *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*. Quito: Taller El Colectivo.
- Ramos Jiménez, Alfredo (1999). “Venezuela, el ocaso de una democracia bipartidista”, en *Nueva Sociedad* 161, Caracas.
- Saint-Upéry, Marc (2008a). *El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas*. Madrid: Paidós.
- Saint-Upéry, Marc (2008b). “¿Hay patria para todos? Ambivalencia de lo público y ‘emergencia plebeya’ en los nuevos gobiernos progresistas”, en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, N° 32, Flacso, sede académica Ecuador, Quito, septiembre.
- Stefanoni, Pablo (2010). “Bolivia: críticas por la adhesión de las FF AA al socialismo”, en *Clarín*, 18-11-2010.
- Stefanoni Pablo (2004). “Ecuador, una ocupación de baja intensidad”, en *Le Monde Diplomatique* edición Cono Sur N° 64, octubre.
- Stefanoni, Pablo, Franklin Ramírez Gallegos y Maristella Savampa (2009). [conversaciones con] *Álvaro García Linera. Biografía política e intelectual*. La Paz: Ed. Le Monde Diplomatique.

- Svampa, Maristella (2009). “Mouvements sociaux, matrices socio-politiques et nouveaux contextes en Amérique Latine”, *Problèmes d’Amérique Latine* N° 74, otoño.
- Tilly, Charles (2010). *Democracia*. Madrid: Akal.
- Uzcátegui, Rafael (2010). *La revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano*. Buenos Aires: El Libertario, La cucaracha ilustrada, Malatesta, Tierra del Fuego.
- Wanderley, Fernanda (2010a). “Políticas sociales a cuentagotas”, periódico *La Razón*, La Paz, 28-11.
- Wanderley, Fernanda (2010b). “Pluralismo económico, mercado y Estado”, ponencia presentada en la Mesa de Diálogo sobre Descolonización, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, invierno.
- Zuazo, Moira (2010). “¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia”, en *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, mayo-junio.